

Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos

Demonstration for the water, the life and the dignity of the people

Santiago Ortiz Crespo

Santiago Ortiz Crespo (Ecuador), estudió en FLACSO Ecuador su maestría y doctorado en Ciencias Sociales. Fue Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales, especialización en Estudios Andinos de FLACSO Ecuador, profesor del Departamento de Sociología y Estudios de Género en las materias de Populismo, Ciudadanía, Participación Ciudadana, Estado y gobiernos locales. Investiga los movimientos sociales y la Revolución Ciudadana. Está inscrito en el Grupo de Investigación de Sociología Política. sortiz@flacso.edu.ec

Fecha de recepción: 23 de julio de 2015.

Fecha de aceptación: 21 de septiembre de 2015.

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/letrasverdes.19.2016.1958>

Resumen

Este artículo analiza la marcha que se realizó en diez provincias de Ecuador entre el 8 y el 21 de marzo de 2012. Se pregunta si acaso la marcha logró posicionar en el escenario político la crítica a la producción minera y si constituyó un momento de inflexión del ciclo de reflujo que vivieron los movimientos sociales desde principios de siglo. Frente a la primera interrogante, la respuesta es negativa. Respecto a la segunda, se plantea que más que una inflexión lo que tuvo lugar es una transformación en la naturaleza de los movimientos sociales. El artículo resume un estudio que examina fuentes documentales (material audiovisual, entrevistas y análisis de discurso del presidente Rafael Correa).

La orientación teórica se basa en un enfoque de análisis de repertorios, inspirado en la teoría de la estructura de oportunidades políticas.

Palabras clave: repertorio, movimientos sociales, Revolución Ciudadana, agua, minería.

Abstract

This article analyses the demonstration which took place in ten provinces of Ecuador between the 8th and 21st March 2012. It inquires whether this social protest positioned in the political arena a criticism towards mining production and if it constituted a turning point in the reflux cycle of social movements since the beginning of the century. The answer for the first question is no. Conversely, regarding the second one, the article suggests that the demonstration reveals a transformation in the nature of social movements. The article summarizes a large study which examines documentary sources (audiovisual material, interviews and analysis of discourse of President Rafael Correa). The theoretical orientation retakes the repertoire analysis approach, inspired by the theory of the structure of political opportunities.

Keywords: repertoire, social movements, Citizen's Revolution, water, mining.

Introducción

La marcha “Por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, organizada por varios gobiernos provinciales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Popular, atravesó Ecuador de sur a norte, del 8 al 21 de marzo de 2012, planteando una plataforma de 19 puntos en el marco del gobierno de la Revolución Ciudadana [1]. La marcha recorrió diez provincias, con acciones locales y expresiones culturales diversas. Si se suma el conjunto de manifestaciones regionales, la marcha contó con la participación de 70.000 personas.

Las interrogantes que orientan este escrito se refieren a dos temas: si la marcha logró un posicionamiento crítico a la minería y si constituyó una inflexión en el ciclo de reflujo

que vivieron los movimientos sociales desde inicios de siglo. En este trabajo se sostiene que la postura anti minera no logra posicionarse en el escenario político, y que la marcha no constituyó una inflexión, sino una *transformación* de los movimientos sociales en el Ecuador hacia una configuración policéntrica.

El artículo resume un estudio del autor sobre el tema, realizado en los años 2012-2013, inspirado en la teoría de movimientos sociales de Tarrow (1997), Tilly (1998, 2000) y Fillieule y Tartakowsky (2015). La estrategia metodológica implicó examinar fuentes documentales, entrevistar a 73 informantes calificados, revisar material audiovisual y realizar un análisis crítico-sociológico del discurso de líderes sociales y del presidente Rafael Correa en cinco enlaces semanales emitidos en el periodo de la marcha. Se realizó además dos talleres para dialogar sobre los resultados con los participantes de la marcha [2].

Contexto

Antes de examinar la iniciativa es importante tener en cuenta el contexto. La “estructura de oportunidades políticas” comprende las “dimensiones consistentes del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente” (Tarrow, 1997: 49). Estas dimensiones contemplan la apertura o no de las instancias de poder, las pugnas entre las élites y la disponibilidad de aliados influyentes. Antes de indagar en la interacción directa de los actores se tendrá presente el contexto, sus desigualdades materiales e institucionales (Fillieule y Tartakowsky, 2015: 90)

Ecuador atravesó un periodo de cambio de un régimen neoliberal a un régimen pos-neoliberal. En el primer periodo los movimientos sociales actuaron en medio de una larga crisis de representación, siendo el movimiento indígena el que lideró la protesta; sin embargo, no tuvo capacidad de generar una propuesta contra-hegemónica y fue rebasado por Alianza País quien accedió al poder (Ramírez, 2010).

Con la presencia de Alianza País desde el 2007 y con la convocatoria de la Asamblea Constituyente se configuró un nuevo régimen, afirmando la soberanía y el rol del Estado (Ramírez, 2012). Las instituciones recuperaron la confianza de la población, mientras el Presidente elevó su capital político: 70% en el 2012, 75% en el 2013 (Habitus

Investigación Quantum, 2015). El gobierno aplicó políticas públicas con una perspectiva universalista respondiendo a demandas redistributivas represadas en el régimen neoliberal. A esto se suma la política de descorporativización de las instancias rectoras de la política pública restando influencia a las organizaciones sociales. En suma se superó el cuadro de inestabilidad política que había facilitado la movilización popular y se consolidó una estructura de oportunidades menos fluida para la acción de los grupos que veían liderando la lucha social y por demandas de reconocimiento (Bastidas y Martí i Puig, 2012).

En ese marco se produce un desacuerdo en las organizaciones sociales y étnicas, entre las que apoyan y las que se oponen al gobierno. En junio de 2008, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley Minera, criticada por los sectores ambientalistas (Acosta y Sacher, 2011), que fue aprobada meses más tarde por la instancia legislativa. El gobierno de Rafael Correa anunció el inicio de una “era postpetrolera” sustentada en la explotación de oro y cobre, que según el discurso del gobierno, financiaría el desarrollo social. Además se puso en debate leyes de agua y la de tierras, que generaron nuevas movilizaciones populares.

El gobierno respondió con violencia y arrestó a manifestantes; además instauró procesos penales por “terrorismo” a varios líderes. En resumen, luego de la fase primaveral de la Revolución Ciudadana, en 2009, se amplió la distancia del gobierno con los sectores que antes habían liderado la lucha social.

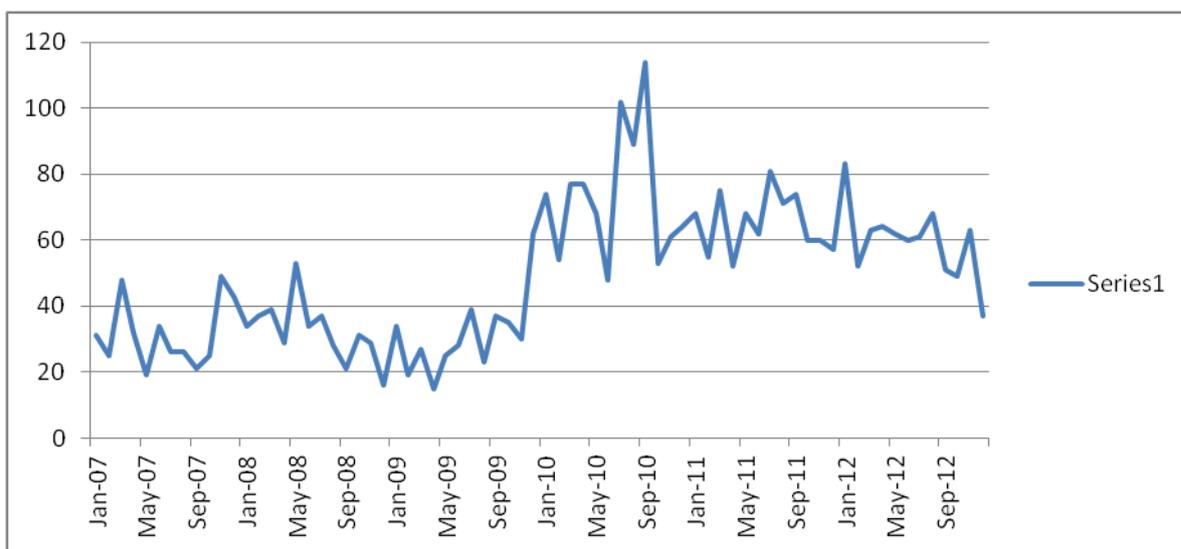
Luego del intento de golpe de Estado del 30 de septiembre del 2010 [3], el gobierno convocó a la consulta/referéndum sobre la justicia. Este fue un recurso plebiscitario para retomar la iniciativa política y concentrar el poder. Si bien triunfó el “Sí”, en algunas provincias andinas y amazónicas triunfó en varias respuestas el “No”. Este fue un espacio de oportunidad para la conformación de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas.

Otro factor a tenerse en cuenta es el ciclo de conflictividad social. Hubo un estancamiento en el número de conflictos sociales protagonizados por trabajadores, campesinos, pobladores, indígenas y grupos locales, registrados en el país desde inicios

de siglo hasta el año 2009. Luego se observó un giro ascendente: en 2009 se registraron 374 conflictos, mientras que en 2010 fueron 881 conflictos.

Gráfico 1

Número de conflictos por mes



Fuente: (Caap, 2013)

Elaboración: autor

La marcha “por el agua y la vida” de marzo de 2012 se realizó en un contexto de consolidación política e institucional del nuevo régimen, aunque el nivel de conflictividad aumentó en las aristas donde se asienta el modelo de desarrollo: la explotación de recursos naturales y el fortalecimiento del Estado, que se impone sobre el mercado y la sociedad civil.

El trayecto y los participantes

Los movimientos sociales son una acción contenciosa de personas que comparten objetivos comunes en un conflicto mantenido con los oponentes y las autoridades (Tarrow, 1997). Para este autor hay que diferenciar los repertorios, los marcos de interpretación y las estructuras de movilización. Uno de los repertorios más utilizados es la manifestación. Fillieule y Tartakowsky advierten que esta debe ser entendida como

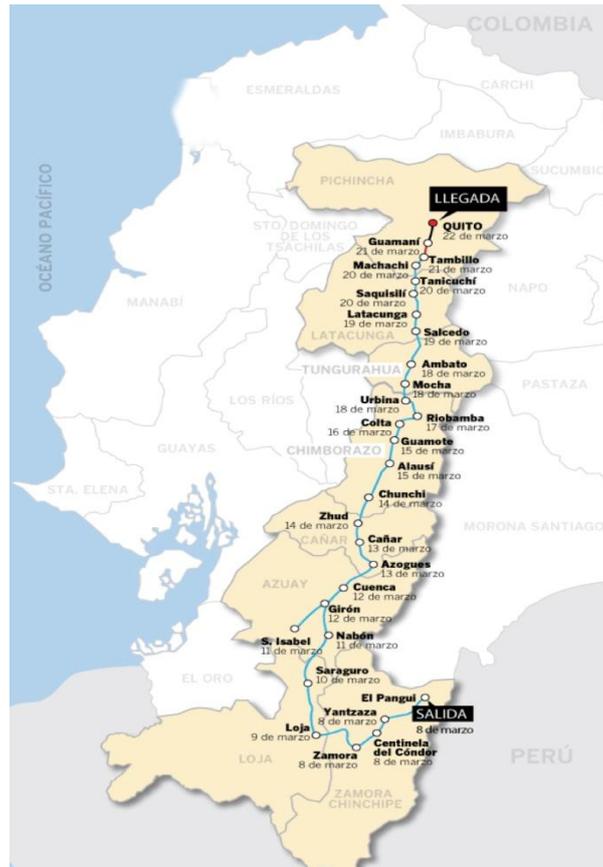
un acto de ocupación de espacios públicos que interpela la autoridad (Fillieule y Tartakowsky, 2015: 44). En este acápite se partirá por examinar los rasgos de la marcha: dónde se realiza, quiénes participan, cómo se expresan y qué proponen-, para luego introducir elementos de interpretación sobre el sentido de la iniciativa y las estrategias de los adversarios en la arena de conflicto.

El anuncio del gobierno de la firma del contrato con la empresa de origen chino Ecuacorriente S.A. (ECSA) para el 5 de marzo de 2012 en Zamora, precipita la convocatoria de la marcha. El prefecto Salvador Quishpe convoca a una Asamblea Provincial que resuelve emprender una marcha exigiendo la salida de las empresas mineras de la Cordillera del Cóndor, donde se sitúa la concesión. Luego se propone la iniciativa en el X Congreso Ordinario de la CONAIE y en la III Cumbre de la Región Amazónica. En enero de 2012 se realiza en Zamora la Asamblea Plurinacional con presencia de varios prefectos, alcaldes, dirigentes de la CONAIE y el Frente Popular, con cerca de dos mil asistentes. Allí se concreta para el 8 de marzo, la realización de la marcha denominada *“Por la democracia, el agua, la vida, la dignidad, la defensa de los recursos estratégicos y la libertad de los pueblos y nacionalidades”*.

Esta iniciativa, que se inició en Zamora y llegó a Quito, recorrió 700 kilómetros y tuvo una duración de quince días, saliendo el 8 de marzo de Zamora, pasando por Loja, Cuenca y recorriendo la Sierra central hasta la capital, donde llega el 22 de marzo, en el Día del Agua. Una semana más tarde se realizó una convención nacional de evaluación de la marcha.

Mapa 1

Recorrido de la marcha



Fuente y elaboración: Diario El Universo, 22 de marzo 2012 (acceso 22 de marzo del 2013, <http://www.eluniverso.com/>)

La manifestación no es solamente un evento puntual; este repertorio puede combinar diversas formas de acción tales como concentraciones, mítines, asambleas, reuniones de diversos tipos conectadas con el evento principal (Fillieule y Tartakowsky, 2015: 159). En el caso estudiado 400 activistas de la CONAIE recorrieron el trayecto siendo recibidos en cada provincia por manifestaciones locales. Si se suman los participantes en los distintos eventos se estima en 70.000 el número de personas movilizadas, entre las que se destacan dos marchas masivas: en Cuenca (33.000 personas) y en Quito (25.000). En cada una de las provincias hubo alrededor de 2000 personas. También se realizaron actos por el Día de la Mujer el 8 de marzo en varias ciudades y reuniones conmemorando el Día del Agua el 22 de marzo [4].

A diferencia de marchas indígenas anteriores, la de 2012 contó no sólo con participación de organizaciones étnicas, sino también de pobladores mestizos urbanos y

rurales. En las provincias del sur predominaron los grupos afectados por la minería, en el centro de la Sierra, juntas de regantes y organizaciones del seguro campesino, mientras en las ciudades actuaron maestros y estudiantes y grupos ecologistas.

Fue clave en la marcha la participación de los gobiernos provinciales. La iniciativa la tuvo el Prefecto de Zamora, Salvador Quispe; el Prefecto del Azuay, Paul Carrasco, convocó a la mayor manifestación en Cuenca; en Cotopaxi la movilización contó con el apoyo del Gobierno Provincial presidido por César Umaquina. Otros convocantes fueron la CONAIE, su organización regional Ecuador Runacunapac Richarimuy (ECUARUNARI), el Frente Popular (con sus bases urbanas) y los grupos ecologistas. Además, contaron con el respaldo de partidos de izquierda radical.

En cada tramo de la marcha el nivel de participación fue diferente debido a distintos conflictos: la existencia de concesiones mineras en el sur (Bonilla, 2013; Pila, 2014), o la reforma de la administración pública que afectó a maestros y trabajadores públicos. Un factor que perjudicó la convocatoria fue la división del movimiento indígena, tal como sucedió en Chimborazo, donde el gobierno provincial mantiene una alianza con el gobierno.

Con respecto al liderazgo de la marcha hay que resaltar el papel que tuvieron los jóvenes de la CONAIE, tanto para el control de la seguridad, como para evitar que la acción se contamine de elementos “politiqueros” y “electoralistas”. Hubo también una “comisión política” para coordinar la marcha, donde participaron autoridades provinciales, dirigentes indígenas como Humberto Cholango y Delfín Tenesaca y líderes del Frente Popular, como Paul Vásquez. Las organizaciones locales conforman comisiones para movilización, logística, política, alimentación, salud, economía (Entrevista, OSC Z4, 2012). También apoyaron los miembros de la Coordinadora Plurinacional de la izquierda (Entrevista, IP Z3, 2012).

Con respecto a la logística fueron claves los recursos de los gobiernos locales, las casas comunitarias indígenas y los alimentos recogidos en el transcurso de la marcha [5]. Los convocantes disponen de tres autos que llevan víveres, ollas y “la vaquita”, una figura emblemática que incentiva la solidaridad para los manifestantes.

Son importantes las personas que acompañan la marcha en las orillas de las carreteras, expresando simpatía, ofreciendo alimentos y vituallas, aunque en algunos casos, contra manifestantes favorables al gobierno que les gritan e insultan. Otros actores claves serán la policía y el ejército que contiene la marcha y los medios de comunicación que siguen todo el recorrido.

Identidad

La marcha tuvo una elevada riqueza simbólica que se expresó en carteles o lienzos, así como en bombas de colores, máscaras para camuflarse ante el fuerte control policial o esculturas como “la vaca” y la animación de grupos de danza y música (Entrevista, OSC Z5, 2012). Lo más significativo fueron los rituales de purificación realizados en las fronteras entre las provincias bajo los signos de la naturaleza: agua, fuego y la Pachamama, presididos por sacerdotes católicos, pastores protestantes y *yachaks* (Diario Hoy, 2012: 13 3, acceso 30 3 2013, www.hoy.com.ec). No se trató, por tanto, de una protesta “combativa”, sino de un evento “pacífico” que reveló las hendiduras y relieves del territorio físico, social y étnico. La marcha fue una celebración del reencuentro y la identidad de actores que habían estado dispersos. Además, los recursos simbólicos configuraron un mensaje ante el público: vuelve un movimiento que propone algo distinto del gobierno.

Como en una cadena que se engarzaba a través de las fronteras locales se dio el relevo del bastón de mando, que se pasaba entre líderes de regiones vecinas (El Universo, 2012: 17- III, acceso 30 3 2013, www.eluniverso.com); además se entregaron collares de flores blancas y rojas “porque el blanco representa que el pueblo indígena quiere la paz y el rojo es símbolo de la resistencia” (Entrevista AM, A5, 2012). Se recupera también el personaje del “*chasqui*” con jóvenes que llevan mensajes: “Compañero *chasqui*, llévele esta noticia, a los pueblos, a las marcas, a los ayllus, lleve también a la autoridades, lleve también al mandatario, a los assembleístas...” decía el dirigente Delfín Tenesaca (CORPANP, 2012).

Al llegar a las ciudades los marchantes se concentran en sitios emblemáticos como plazas o parques donde previamente se han instalado tarimas y los dirigentes emiten sus

discursos. Al final es frecuente que se presenten grupos de música y se termine la jornada con un ambiente festivo.

Cuando llegan a Quito, hay una significativa manifestación acompañada de música, tambores, churos, pitos y la música “bomba” interpretada por un grupo afro ecuatoriano. La marcha culmina en el parque “Del Arbolito”, en el centro norte de la capital, desde donde los líderes concurren al Palacio Legislativo a entregar a los legisladores “el agua que queremos defender” (Entrevista, OSC Z3 2012). En ese punto sin embargo la concentración se “desgrana”:

“Una de las cosas que me decepcionó a mí del cierre del fin de la marcha es que no pudimos mantener la atención de todos los actores que llegamos al Arbolito...y no logramos un cierre contundente” (Entrevista, OSC Z9, 2012).

Así, una marcha que tuvo un potencial simbólico, que articuló actores diversos y una amplia concurrencia no tuvo un final que confirme el sentido que estuvo en su convocatoria. Tampoco en la convención que se realizó una semana más tarde para evaluar la marcha se planteó una salida que dé continuidad a la movilización y más bien se proyectó la participación electoral.

Discursos y demandas

Una de las dimensiones de la acción colectiva es que afirma la cohesión de los participantes y su sentido de pertenencia; permite por una parte el auto reconocimiento de los actores, pero por otra, genera una diferenciación con el adversario. Así los marchantes se auto caracterizan como “pobres” y “humillados” por el gobierno actual. Sin embargo, no son “borregos”, pues “somos pueblos que defendemos nuestra dignidad” (Entrevista, AM, A5, 2012). La marcha fue asumida como una “prueba de vida” que demostró la capacidad de los actores populares de sobrevivir ante la arremetida del gobierno. Esto se expresó en la consigna “No somos cuatro pelagatos”, en respuesta a una frase despectiva del presidente Correa sobre el número de manifestantes.

En un ambiente polarizado se produce un contrapunto con los discursos del Presidente que les acusa de violentos: para los manifestantes la marcha es pacífica, la idea es caminar “con alegría y con el espíritu de triunfar” y niegan las acusaciones de que intentan desestabilizar al régimen.

Legitiman la movilización disputando el sentido del “Buen Vivir”, el “Sumak Kausay” y los derechos de la Constitución de Montecristi, pero también la marcha se diferencia del Gobierno, pues expresa “un pueblo descontento que rechaza la política entreguista, la política vergonzosa del gobierno de Correa hacia las transnacionales y hacia los grupos de poder” (Quispe, Salvador, CORPANP, 2012). Se acusa al gobierno de derechización, que ha impuesto las empresas multinacionales en el territorio (Calapucha, N. CORPANP, 2012) manteniendo prácticas colonialistas (Entrevista, AP Z3, 2012). Para los manifestantes todo es malo en el gobierno: daña el ambiente, contamina el agua, reprime, no permite la participación. Así, la “confrontación” con el presidente contribuye a unir a los diferentes (Diario de Campo, 2012).

Con respecto a la plataforma de 19 puntos, los temas relacionados con el agua y los recursos naturales son los más mencionados en los discursos de los líderes en 37 ocasiones [6]. Los temas agrarios, la aprobación de la Ley de Tierras y la protección de las economías campesinas ante los impuestos son mencionados en 28 ocasiones. Hay otras demandas: la garantía del derecho a la educación en 13 oportunidades y la criminalización de la protesta social también en 13. Los demás puntos son mencionados en menos ocasiones.

En torno a la minería hay variaciones entre la posición de los Prefectos que hablan contra la minería irresponsable, los líderes del Frente Popular que enfatizan el rechazo a las transnacionales y los ecologistas y las comunidades cercanas a los megaproyectos que se oponen a toda forma de minería. El tema minero no termina de posicionarse: uno de los principales gestores de la marcha señala que el tema minero no fue lo suficientemente explotado: “Cholango, no conoce el tema minero; Tenesaca no conoce el tema minero; Quishpe es el único que conoce pero ... cuestiona los procedimientos antes que el sentido mismo del desarrollo detrás del proyecto minero...” (Entrevista, OSC-Z9, 2012). Y las bases tampoco lo asumen: la postura antiminera se planteó en las

provincias del sur, mientras en la Sierra centro predominaron los temas agrarios y de agua.

Hay que advertir que los proyectos estratégicos polarizan el conflicto con las comunidades afectadas: Pangüi, Santa Isabel, Tarqui, Girón e Intag; las banderas anti mineras son asumidas por estos sectores y no por la mayoría de los participantes. Es un nuevo fenómeno de la lucha social que una autora denomina “giro ecoterritorial de las luchas sociales” (Svampa, 2011) para captar un nuevo tipo de conflictos localizados en el territorio en América Latina. Estas comunidades afectadas, con apoyo de los activistas ambientales asumen una postura de rechazo frontal, de todo o nada, con un alto contenido moral contra el *extractivismo perverso*. Esto resta a los organizadores margen de negociación de otras reivindicaciones con las autoridades.

Respuesta gubernamental: policía y contramarchas

La respuesta del gobierno fue desplegar las fuerzas del orden, pero también disputar el espacio público y la adhesión de actores sociales y autoridades locales. La policía creó barreras de contención y hostigó a los manifestantes en los 700 km de la carretera Panamericana; hubo detenciones previas acusando a estudiantes de terrorismo y patrulleros interceptaron vehículos en los que se trasladaban los manifestantes (Diario El Universo, 2012:12 III, acceso 30 3 2013, www.eluniverso.com). Desde el sur un helicóptero siguió la marcha hasta la llegada a Quito; también intervinieron los militares en varios puntos en operativos de “rutina” (Diario Hoy, 2012:13 III, acceso 30 3 2013, www.hoy.com.ec). En Azogues, provincia de Cañar, se descubrieron a dos agentes infiltrados vestidos de civil (Entrevista, OSC-Z3, 2012). En Quito no se dejó entrar la marcha al centro histórico, siendo desplazada al parque del Arbolito junto a la Asamblea Nacional, donde se produce un enfrentamiento (Diario Hoy, 2012: 22 III, acceso 30 3 2013, www.hoy.com.ec).

Junto al operativo policial, el gobierno implementó plantones, vigiliadas, “ferias ciudadanas”, concentraciones y “contramarchas” incentivando la adhesión a la Revolución Ciudadana. Iniciativas convocadas por el gobierno a propósito del aprendizaje en los sucesos del 30 de septiembre, pues aquel consideraba que se había dado una respuesta débil de la población ante el intento de golpe. El propio Rafael

Correa, antes apático ante la movilización popular, en un discurso pronunciado el 22 de marzo en la Plaza Grande expresó: “nos hicieron un favor, hemos salido fortalecidos, lo que le faltaba a esta revolución era capacidad de movilización” (Enlace 264, 24 de marzo 2012).

En esa perspectiva el gobierno combinó entrega de obras a los pobladores, partidas a las autoridades locales y títulos de propiedad a campesinos, actos por el día de la mujer y asambleas con regantes, Juegos Amazónicos y ferias Socio-País -donde se publicitaron los programas sociales-; al final se convocó una gran concentración en Quito, el 22 de marzo, para llenar cuatro plazas. Se dio mucha importancia a la negociación con los gobiernos locales: se ofreció -por ejemplo- 100 millones de dólares a las juntas parroquiales (Diario Hoy, 2012:19 de marzo). En varias localidades se movilizó el Ministro de Finanzas para concretar partidas presupuestarias para convencer a alcaldes y prefectos. En total se podría estimar una movilización de al menos 60.000 personas por parte del gobierno, con un gasto de no menos de 100 millones de dólares [7]. Estas acciones fueron previstas por el comando gubernamental en un plan que se ejecutó casi al pie de la letra [8].

Las actividades fueron acompañadas de una intensa campaña de comunicación. Los mensajes se desplegaron en vallas en las carreteras, cadenas televisivas y sabatinas. El Presidente puso el tono del discurso gubernamental:

“Qué fracaso que han tenido los conspiradores, los odiadores, los sufridores, los retardatarios, los que quieren inmovilizar al país, los defensores del *statu quo*, el día de hoy, cuando marchas con el propósito de desestabilizar... y catapultarse para próximas elecciones, qué pobreza de convocatoria que han tenido” (El Universo, 2012: 8 III) ”.

Acusa a “la izquierda infantil, la izquierda con plumas, con ponchos” (Enlace 262, 10 III 2012). Para el Presidente, los manifestantes están manipulados por grupos de derecha que tienen a su favor dinero, medios de comunicación, aliados en la banca y a nivel internacional (Enlace 262, 10 de marzo 2012). Para Rafael Correa, el objetivo de la marcha es desestabilizar al régimen y sentar bases para candidaturas presidenciales, en medio de una nebulosa de demandas contradictorias (Enlace 263,7 de marzo 2012).

El discurso del Presidente se orientó a defender la democracia y la difusión de un mensaje de “buena voluntad” en el cuidado del agua y el ambiente. Para el primer mandatario, el desarrollo necesita de los recursos económicos provenientes de la minería, mientras presume que hay control sobre los peligros ambientales (Enlace 262, 10 de marzo 2012).

Conclusiones

Este estudio se guió con el enfoque de “estructura de oportunidades políticas” de Tarrow (1997: 49) y de las dimensiones estructurales de Fillieule y Tartakowsky (2015). Para el año 2012, la Revolución Ciudadana logró consolidar su poder en el Estado en medio de un ambiente de bonanza económica, consiguiendo un apoyo electoral mayoritario y altos índices de confianza. En ese marco fue evidente una notoria desigualdad entre los actores de la marcha y el gobierno, pues aquellos no contaban con recursos institucionales ni aliados fuertes, mientras los grupos populares perdían influencia en las políticas públicas por la “descorporativización” del Estado y la restricción de derechos de organización. Hay que señalar factores favorables a los marchantes: el apoyo de los gobiernos provinciales, victorias parciales de la oposición en el referéndum del 2011 y la presencia de una prensa opositora que se hizo eco de las voces contrarias al gobierno. En resumen, no se trataba de una estructura de oportunidades políticas fluida, como en la etapa neoliberal, en donde la movilización social fue un factor en el desgaste del régimen; ahora se trataba de una estructura solidificada y restrictiva para movimientos de signo independiente.

Los repertorios tienen una relación directa con los componentes culturales de la sociedad. En este caso los actores convocan a una “marcha” y no a un levantamiento o una huelga, pues no se trataba de una medida de confrontación, sino una iniciativa de afirmación identitaria e interpelación al gobierno. Históricamente los indígenas habían utilizado este repertorio como una forma de escenificar la protesta y crear suspenso con una trayectoria que recorrió los pliegues de la diversidad territorial. El tiempo y el espacio generan condiciones para el reencuentro de los actores, mientras los rituales y símbolos configuran un desempeño para despertar la adhesión de una población que vivía la “ensoñación” de la Revolución Ciudadana.

Con 70.000 personas en las carreteras y en las calles y una cierta acogida favorable por parte de la población de la Sierra central y sur, se podría decir que la medición de fuerzas fue positiva para los organizadores de la marcha. Sin embargo, este criterio se matiza si se observan dos dimensiones, una interna y otra externa: en cuanto a la primera, hay un relativo desacoplamiento en los actores: hay varias marchas con distintos contenidos que corresponden a diversos problemas locales y que no logran acoplarse plenamente durante los quince días. También se nota la ausencia de un actor hegemónico, como fue el movimiento indígena en la década de 1990. La de marzo del 2012 fue una marcha poli-céntrica en donde intervienen diversos actores con diversos enfoques y demandas.

En el plano de la interacción externa, que depende de la capacidad política de los contendientes, hay que señalar la falta de una propuesta política coherente, pues la plataforma se fue articulando sobre la “Marcha”, combinando reivindicaciones de diverso tipo, donde la gravitación de demandas ambientales no deja margen de negociación a los líderes. A esto hay que sumar el carácter identitario de la iniciativa y la demanda de reconocimiento, que difuminan las demandas específicas.

Es un acontecimiento que gana en radicalización pero pierde en efectividad política. En este sentido el giro eco territorial y localista del movimiento popular, las tensiones entre los colectivos que buscan demostrar la fuerza del movimiento social sobre el componente político de un periodo preelectoral, fueron factores que inmovilizaron a los líderes de mayor experiencia e impidieron cualquier posibilidad de negociación.

En el plano de la interacción cada adversario juega sus naipes. En el comando gubernamental hubo dudas y discrepancias, pero al final se ejecutó desde el comando central una estrategia que utilizó de manera inédita elementos de coerción y la movilización para disputar los territorios en los cuales se había debilitado en el referéndum.

Con la “contramarcha” el gobierno medió fuerzas en los espacios públicos con una movilización de cerca de 60.000 personas. Pero contó con innumerables recursos:

emprendió negociaciones con autoridades locales, desplegó una intensa campaña de comunicación que tuvo como vocero principal al presidente Correa, quien se encargó de deslegitimar a sus adversarios y promocionó la imagen de los ecuatorianos como mendigos sentados en un banco de oro.

Todo ello utilizando los canales institucionales, funcionarios, recursos y programas de los ministerios, además de la maquinaria mediática del gobierno; era evidente que el gobierno no estaba dispuesto a reconocer a interlocutores en la sociedad civil, menos aún a permitir una voz diferente sobre el modelo de desarrollo y el Buen Vivir.

El estudio se propuso indagar sobre si la marcha posiciona una postura anti-minera: tal como se ha visto en los párrafos anteriores, la respuesta es negativa. En ello incidieron las diferencias en los enfoques de los convocantes, la falta de acoplamiento de la plataforma, la falta de una postura clara de los organizadores y las diversas sensibilidades de las bases ante el tema minero. Como señaló lúcidamente Manuel Chiriboga, mientras el campo de las demandas distributivas sentidas por la mayoría de la población es hegemonizado por la Revolución Ciudadana, en el campo ambientalista se posiciona el polo indígena y ecologista, mientras en el campo de las demandas democráticas y de la libertad de expresión es dominada por la derecha (Chiriboga, 2011: 13).

Pese al lenguaje del *Sumak Kausay* y el Buen Vivir de la Constitución, las demandas ambientalistas son muy avanzadas para el común de la población, que están preocupados de necesidades más inmediatas represadas en los 25 años de la “larga noche neoliberal”, mal que bien atendidas por el gobierno. En ese sentido la marcha no logra involucrar a la población en una posición frontal contra el modelo de desarrollo, que al fin y al cabo tiene resultados en la expansión del consumo y el mejoramiento de las condiciones de vida. La plataforma de los 19 puntos, no contiene una demanda equivalente, como plantearían Laclau y Mouffe (1985), que articule el sentido de la movilización popular y la constitución de un sujeto contrario al Gobierno.

Si en términos programáticos no se posiciona la crítica sustantiva al modelo de desarrollo “extractivo”, otro tanto sucede con la supuesta inflexión en el ciclo de movilización popular. Marzo de 2012 es un punto de encuentro y de interpelación al régimen pero no evidencia un “salto cualitativo” de los movimientos sociales de oposición radical al gobierno. Por el contrario, lo que se muestra es que existe una transformación de los mismos, en su naturaleza, tanto por su heterogénea composición social e institucional, como por el tipo de demandas territoriales que plantean, así como el menor peso relativo de las organizaciones convocantes. El resultado de todo ello es un movimiento social poli céntrico.

Por ello la marcha no fue un hito en un camino ascendente en el ciclo de conflictividad social. El nivel de conflictividad social que se mantuvo bajo entre el 2000 y el 2009, subió durante tres años, pero volvió a reducirse en el 2013, manteniéndose nuevamente estancado y disperso hasta finales del 2014 e inicios del 2015.

Los defensores de la organización social no lograron consolidar un bloque unificado. Es paradójico que en la convención realizada una semana después de la marcha, el eje de la evaluación fuera la participación electoral en los comicios del 2013 y no el balance de la acción realizada, ni la articulación de un frente social consistente (Diario de campo, 2012). Esto implicó que pese al esfuerzo de los activistas y ecologistas por demostrar la fortaleza de la organización social, la única salida posterior fuera electoral con el respaldo a la Coordinadora Plurinacional en su participación en los comicios del 2013.

Además, la marcha mostró, tal como afirmaba el registro de conflictos del CAAP, que se mantiene la mixtura entre lo social y lo político, entre la acción colectiva y la participación electoral. Esto tuvo relativa validez para desgastar al régimen neoliberal, pero resultó inadecuado para desgastar a un régimen robustecido como el de la Revolución Ciudadana. La confusión de planos de lucha le resta autonomía y capacidad de acción al movimiento social, al tiempo que marca a los actores políticos con un fuerte rasgo identitario que le resta capacidad de negociación política con otros actores.

Hay que señalar que ese frente social tiene dificultades de constituirse desde un movimiento poli-céntrico. La presencia de autoridades que desde las instituciones conducen el movimiento, interfiere con la lógica de una estructura horizontal de la organización popular (Entrevista FC AZ, 2012). Esto se evidenció en el caso de los prefectos, que con su fuerte liderazgo demostraron más poder que las estructuras organizativas del movimiento indígena. También las luchas ecoterritoriales vuelven locales y menos nacionales a los movimientos, aparte que las propias organizaciones nacionales están disminuidas. Ni la CONAIE, ni el Frente Popular, con sus bases debilitadas por la ofensiva del gobierno, logran constituir la columna vertebral del movimiento social.

Por todas estas razones se concluye que no se da tanto una inflexión cuanto una *transformación* en la naturaleza de los movimientos sociales. Esto implica que el periodo de la Revolución Ciudadana ya no existe ni un movimiento clasista obrero poderoso, como en los 70, ni un movimiento indígena, como en los 90, que jueguen un rol de columna vertebral de los sectores subalternos.

Hay que recordar que si bien la marcha no logró consolidar un frente social sólido, sí proyectó una alianza de las izquierdas para las elecciones de 2013 con la candidatura de Alberto Acosta para la presidencia. Sin embargo, esta candidatura no logró buenos resultados, pues no alcanzó ni el 5% de los votos, mientras que Rafael Correa ganó la presidencia en la primera vuelta, con un 57% y logró 100 parlamentarios.

En descargo se podría decir que la marcha sí influyó, a mediano plazo, en los escenarios locales: los niveles de conflictividad en el tema minero polarizaron las sociedades regionales y catapultaron a los líderes de la movilización a los cargos de elección popular, como el caso de las victorias de Pachakutik y Participa en la elección de los prefectos de Zamora, Azuay, Cotopaxi o Morona Santiago, el MPD en Santa Isabel o el movimiento Vivir Bien en Cotacachi, Imbabura, en los comicios de 2014.

La contramarcha movilizó también a miles de personas en las provincias y llenó varias plazas en Quito con personas fieles al gobierno. No se puede negar que hay sectores

populares que confían en él; ello responde de alguna manera a las demandas de acceso a los servicios públicos, reivindicaciones que se articulan bajo el principio de igualdad ciudadana y de justicia redistributiva. Con mayor fuerza y universalidad que las demandas avanzadas y particulares sostenidas por los actores de la Marcha, la respuesta del gobierno convierte en realidad la plataforma anti neoliberal por la que se luchó por más de 15 años.

En general a Alianza País le va bien con la contramarcha: demuestra su capacidad de movilización y aceita su maquinaria electoral. Ello no significa que haya logrado eliminar a su adversario, pues el “no somos cuatro pelagatos” demuestra que las organizaciones sociales radicales lograron pasar su prueba de vida, luego de cerca de una década de desmovilización y control gubernamental. Sin embargo, tampoco el gobierno tuvo mayor interés y capacidad de dotarse de una organización popular *ad hoc*. Las contramarchas aparecen más como un dispositivo para disputar el espacio público, que un recurso consistente para articular a las masas con el proyecto “revolucionario”, lo que sí sucede en procesos nacional-populares, como en Argentina, Venezuela o Bolivia [9]. Lo que sí ocurrió en esa época es que el gobierno empezó a modificar su mirada y a dialogar con varias organizaciones significativas, como los servidores públicos, los choferes, los pescadores, los campesinos montubios, los trabajadores eléctricos, y la red de maestros y estudiantes por la Revolución Ciudadana.

Estas conclusiones no deben ocultar tres elementos significativos que deben subrayarse: el tema minero condensa una problemática regional clave en el sur del país; la marcha fue una prueba de vida de los movimientos sociales más radicales que hizo del territorio y la diversidad de actores, una expresión de una gran riqueza simbólica, frente a una imponente ofensiva gubernamental. En tercer lugar, marzo de 2012 fue un momento clave, donde la maquinaria gubernamental probó una estrategia que, a la postre, le benefició políticamente en el triunfo electoral de 2013.

Notas

[1] “Revolución Ciudadana” se denomina al proceso de cambio postneoliberal iniciado en el 2007 con el ascenso al poder de Rafael Correa, el movimiento Alianza País y la realización de la Asamblea Constituyente. Rafael Correa es reelecto a inicios del 2009 y en el 2013 y contó con mayoría parlamentaria.

[2] El equipo estuvo conformado por Alejandra Espinosa, quien coordinó el trabajo de campo, Clemente Mamani, Valerie Carmel, Liz Lema, Felipe Terán y Nilson Fajardo, estudiantes becarios de FLACSO. A todos y todas consigno mi agradecimiento.

[3] Hay varias interpretaciones del acontecimiento; aquí se asume la interpretación de que se trataba de un intento de un golpe no tradicional (Páez. 2010).

[4] Se trata de una estimación a partir de contrastar opiniones vertidas por líderes entrevistados en cada provincia, los videos documentales y las noticias de prensa.

[5] En el blog de Ecuarunari se pudo verificar los sitios por donde pasaban los marchantes, (<http://ecuarunari.org/portal/>).

[6] Menciones en los discursos de líderes registrados en 70 documentales audiovisuales, CORPANP, 2012.

[7] Estimación realizada a partir del costo de los convenios y ofertas a partir de noticias de prensa, incluyendo el costo de la propaganda. Aquí no se suma lo ofrecido a las juntas parroquiales.

[8] Gobierno Nacional, 2012, Estrategia Política Programática, documento difundido por el director del MPD Luis Villacis [http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=168433&umt=director del mpd denuncia que gobierno busca boicotear marchas de 1 8 marzo](http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=168433&umt=director_del_mpd_denuncia_que_gobierno_busca_boicotear_marchas_de_1_8_marzo), (acceso 20 III 3012). En varias entrevistas este dato fue confirmado (Diario, III 2012)

[9] Esta es una hipótesis que se está trabajando en un nuevo estudio del autor.

Referencias citadas

- Acosta, Alberto y William Sacher (2011). *La minería a gran escala en Ecuador. Análisis y datos estadísticos sobre la minería industrial en el Ecuador*. Quito: Ed. Abya Yala, Universidad Politécnica Salesiana.
- Bastidas, Cristina y Salvador Martí i Puig (2012). “¿Ha cambiado la protesta? La coyuntura actual de movilizaciones en Bolivia y Ecuador”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, No. 44, pp. 19-33.
- Bonilla, Omar (2013). “Agua y minería en el Quimsacocha”. Disertación de maestría, Flacso Ecuador.
- Centro Andino de Acción Popular (Caap) (2013). “Conflictividad sociopolítica, 2007-2012 (Bases de datos)”. *Ecuador Debate*, No. 70-87.
- Chiriboga, Manuel (2011). “Diálogo sobre la coyuntura”. *Ecuador Debate*, No. 84, pp. 7-20.
- Espinosa Alejandra (2011). “Correa y la Revolución Ciudadana, una mirada desde la periferia”. Disertación de maestría en Ciencias Políticas, FLACSO.
- Habitus Investigación Quantum (2015). “Informe de estudio de opinión pública”. Boletín periódico mensual, marzo.
- Laclau Ernesto y Chantal Mouffe (1985). *Hegemonía y estrategia socialista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Olivier Fillieule, Danielle Tartakowsky (2015). *La manifestación, cuando la acción colectiva toma las calles*, Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Pila Guzmán, Paola (2014). “Inscripción territorial de la identidad hídrica: la reterritorialización a partir de la gestión del agua”. Disertación de maestría, Flacso Ecuador.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2010). “Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)”. *OSAL*, No. 28, Año XI, pp. 17-47.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2012). “El Estado en disputa: Ecuador, 1990-2011”. En *Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011*, pp. 52-70, Margarita Velasco Abad,”. Quito: Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia/Plan International/ Save the Children/ UNICEF.
- Svampa, Maristella (2011). “Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales. ¿

Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas”. En *Más allá del desarrollo*, pp 185-216, Miriam Lang y/ Dunia Mokrani, compiladores. Quito: Ediciones ABYA Ayala/Fundación Rosa Luxemburgo.

Tarrow, Sidney (1997). *El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. México: Alianza Editorial.

Tilly, Charles (2000). Acción Colectiva, en *Apuntes de investigación*, Año IV, No. 6, Cesyp, Buenos Aires: Fundación del Sur.

Tilly, Charles (1998). *Conflicto político y cambio social*. Madrid: Trotta.

Documentos

CORPANP (2012). Registro audiovisual de la marcha indígena por el agua, Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos – CORPANP.

Correa, Rafael (2012). “Enlaces sabatinos”. Disponible en <http://enlace-ciudadano.gob.ec/> (visitado el 5 de junio 2013).

Ortiz, Santiago (2012). *Diario de Campo*.